

No. del Resolutivo: RCT\_ 3436\_2024

En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, el **13 de noviembre de 2024**, mediante el Acta de la **CENTÉSIMA NONAGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA -CXCVIII-**, este Comité de Transparencia del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, procede a dictar la presente resolución con base en los siguientes:

### ANTECEDENTES

**ÚNICO.** Mediante oficio **DEI/213/2024** del **13 de noviembre de 2024**, la licenciada **Laura Elena López Mata, Unidad de Enlace de la Secretaría de la Honestidad (SH)**, solicita se confirme la clasificación de información confidencial, con motivo de la solicitud tramitada bajo el folio interno **61449**, correspondiente al folio PNT **111100500407424**, que cita:

*«¿Quiero saber las asesorías que han brindado los siguientes asesores de la comisión estatal de atención integral a víctimas, el número de acompañamientos del 01 de Enero del 2022 al 30 de Octubre del 2024, denuncias que tengan dichos asesores, procedimientos y además saber la efectividad de dichos asesores, de los asesores jurídicos que quiero la información única y exclusivamente son: ¿Román Valdivia Ortega, Francisco Ornar Ramírez Escobedo, Diana Karina Sánchez Gómez, Diego Isaac Licea Pegueros, Gerardo Juvenal Jiménez Alemán, Luz Elizabeth Monjaraz Guerrero, Oscar Leonardo Hernández Vázquez, Karla Maurilia López Lomelí y ¿Héctor Adán Gutiérrez Delgado.» (Sic)*

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. COMPETENCIA.** Este Comité de Transparencia es competente para conocer y resolver las solicitudes clasificación de información. Lo anterior, de acuerdo a lo establecido en los artículos 43, 44 fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 51, 52, 53, 54 fracciones I y XII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, 17, 19, 22 fracciones V y X, 23, 24, 25 y 31 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo del estado de Guanajuato, así como los numerales Segundo fracción III, Séptimo fracción I y Sexagésimo segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.

**SEGUNDO. REVISIÓN DE LA CLASIFICACION DE LA INFORMACIÓN.** En términos de lo dispuesto por el artículo 65 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, la clasificación de la información se llevará a cabo, entre otros supuestos, cuando se reciba una solicitud de acceso a la información, lo cual en el presente caso se actualiza. Por tanto, se admite a trámite la solicitud de clasificación de información tramitada bajo el oficio número **DEI/213/2024**.

RCT\_3436\_2024 Página 1 de 17



## Comité de Transparencia del Poder Ejecutivo

A efecto de resolver sobre la presente solicitud, es necesario referir que **Unidad de Enlace de la Secretaría de la Honestidad (SH)**, expone en lo medular, en su oficio de solicitud lo siguiente:

« (...)»

Con fundamento en los artículos 54 fracción I y 65 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato solicito se confirme la clasificación de Confidencialidad de manera completa que emite el **Licdo. Juan Manuel Martínez Muñoz**, Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Honestidad, de conformidad con los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, con fundamento en el artículo 77 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, en correlación con el artículo 3 fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y de conformidad a lo siguiente:

A la Secretaría de la Honestidad le fue turnada la solicitud de información que a continuación se menciona:

Folio	INFORMACIÓN SOLICITADA
61449	«¿Quiero saber las asesorías que han brindado los siguientes asesores de la comisión estatal de atención integral a víctimas, el número de acompañamientos del 01 de Enero del 2022 al 30 de Octubre del 2024, denuncias que tengan dichos asesores, procedimientos y además saber la efectividad de dichos asesores, de los asesores jurídicos que quiero la información única y exclusivamente son: ¿Román Valdivia Ortega, Francisco Ornar Ramírez Escobedo, Diana Karina Sánchez Gómez, Diego Isaac Licea Pegueros, Gerardo Juvenal Jiménez Alemán, Luz Elizabeth Monjaraz Guerrero, Oscar Leonardo Hernández Vázquez, Karla Maurilia López Lomelí y ¿Héctor Adán Gutiérrez Delgado. COMISION ESTATAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A VICTIMAS.» (SIC)

De lo anterior se destaca que entre la información solicitada se encuentra **informar de los CC. ROMÁN VALDIVIA ORTEGA, FRANCISCO ORNAR RAMÍREZ ESCOBEDO, DIANA KARINA SÁNCHEZ GÓMEZ, DIEGO ISAAC LICEA PEGUEROS, GERARDO JUVENAL JIMÉNEZ ALEMÁN, LUZ ELIZABETH MONJARAZ GUERRERO, OSCAR LEONARDO HERNÁNDEZ VÁZQUEZ, KARLA MAURILIA LÓPEZ LOMELÍ y/o HÉCTOR ADÁN GUTIÉRREZ DELGADO, las denuncias o procedimientos que se tuvieron en su contra, durante el periodo comprendido del 01 de enero de 2022 al 30 de octubre de 2024.**

Es necesario precisar, el 26 de septiembre de 2024 entró en vigor, el Decreto Legislativo número 345, publicado el 17 de septiembre de 2024 en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Guanajuato, número 187, Sexta Parte, mediante el cual se reformó la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, donde la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, cambian su denominación a **Secretaría de la Honestidad**, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 fracción XI, y Sexto Transitorio de la citada Ley Orgánica. En virtud de ello, las referencias en el presente acuerdo realizadas a la Secretaría de la Honestidad se entenderán respecto de la otrora Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, denominación vigente previo a la entrada en vigor del señalado Decreto Legislativo.

Así también, es necesario establecer que de conformidad con los artículos 3 fracciones II, III, IV, XX y XXII, 9 fracciones I y II, y 10 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, la actualmente denominada **Secretaría de la Honestidad y los Órganos Internos de Control de las**



**Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal**, se encuentran **legalmente facultados para investigar las faltas administrativas** imputables a servidores públicos y particulares a través de las autoridades investigadoras que reglamentariamente tengan conferida dicha atribución, así como **substanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa por faltas no graves**, e inclusive **substanciar y remitir para su resolución al Tribunal de Justicia Administrativa** los procedimientos de responsabilidad administrativa por **faltas graves**, por medio de la autoridad substanciadora / resolutora que reglamentariamente tiene conferida la respectiva atribución.

De igual forma, es importante mencionar que los **Órganos Internos de Control de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal**, en el caso en particular, el **Órgano Interno de Control de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas**, dependen jerárquica y funcionalmente de la Secretaría del Poder Ejecutivo con atribuciones de Control Interno, facultada a cargo de esta Secretaría de la Honestidad, conforme a lo dispuesto en el artículo 32 fracción I inciso g) de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato. Por ello, para efectos de la atención del folio en cita, esta **Secretaría de la Honestidad** clasificará la información de la existencia o inexistencia de denuncias y procedimientos de responsabilidad administrativa tramitados por sus **Autoridades Investigadoras, Substanciadoras y Resolutoras**, así como lo correspondiente a la existencia o inexistencia de denuncias recibidas por el **Órgano Interno de Control de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas**.

Bajo ese contexto, una vez analizada la solicitud por el representante jurídico de la Unidad Administrativa Responsable en los términos expuestos por el peticionario, respecto del dato previamente referenciado, ha resuelto determinar lo siguiente:

Se clasifica como información confidencial, la correspondiente a **la existencia o inexistencia de denuncias y procedimientos de responsabilidad administrativa iniciados en contra de ROMÁN VALDIVIA ORTEGA, FRANCISCO ORNAR RAMÍREZ ESCOBEDO, DIANA KARINA SÁNCHEZ GÓMEZ, DIEGO ISAAC LICEA PEGUEROS, GERARDO JUVENAL JIMÉNEZ ALEMÁN, LUZ ELIZABETH MONJARAZ GUERRERO, OSCAR LEONARDO HERNÁNDEZ VÁZQUEZ, KARLA MAURILIA LÓPEZ LOMELÍ y HÉCTOR ADÁN GUTIÉRREZ DELGADO**, tramitados por las **Autoridades Investigadoras, Sustanciadoras y Resolutoras de la Secretaría de la Honestidad** y la existencia e inexistencia de denuncias recibidas por el **Órgano Interno de Control de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas**, en el periodo comprendido del 01 de enero de 2022 al 30 de Octubre de 2024; que en su caso, no hayan concluido en una **sanción firme de inhabilitación por la comisión de una falta administrativa grave**, pues el artículo 27 párrafo cuarto de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, en relación con el artículo 58 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Guanajuato, establecen que en la materia de responsabilidad administrativa, únicamente puede ser pública la información relativa a la sanción de inhabilitación que deriven de la comisión de una falta administrativa grave y que se encuentre firme.

Lo anterior, con el fundamento legal y los motivos expresados en la clasificación de confidencialidad que esa autoridad administrativa emite y que se anexa al presente, mismo que se somete a consideración del Comité de Transparencia del Poder Ejecutivo, para su confirmación, en los términos legales aplicables al caso y a efecto de poder brindar la respuesta correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

I. El nombre del área del cual es titular quien clasifica	Secretaría de la Honestidad.
---	------------------------------



## Comité de Transparencia del Poder Ejecutivo

<p>II. La identificación del documento del dato que se clasifica como información confidencial</p>	<p>Se clasifica como información confidencial, <b>la existencia o inexistencia de denuncias y procedimientos de responsabilidad administrativa iniciados en contra de ROMÁN VALDIVIA ORTEGA, FRANCISCO ORNAR RAMÍREZ ESCOBEDO, DIANA KARINA SÁNCHEZ GÓMEZ, DIEGO ISAAC LICEA PEGUEROS, GERARDO JUVENAL JIMÉNEZ ALEMÁN, LUZ ELIZABETH MONJARAZ GUERRERO, OSCAR LEONARDO HERNÁNDEZ VÁZQUEZ, KARLA MAURILIA LÓPEZ LOMELÍ y HÉCTOR ADÁN GUTIÉRREZ DELGADO, tramitados por las Autoridades Investigadoras, Sustanciadoras y Resolutoras de la Secretaría de la Honestidad y la existencia e inexistencia de denuncias recibidas por el Órgano Interno de Control de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, en el periodo comprendido del 01 de enero de 2022 al 30 de Octubre de 2024; que en su caso, no hayan concluido en una sanción firme de inhabilitación por la comisión de una falta administrativa grave, pues la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato considera que en la materia de responsabilidades administrativas, únicamente puede ser pública la información relativa a las sanciones de inhabilitación, y cuyo caso encuadre en los siguientes <b>supuestos</b>: solamente serán del conocimiento público las que se refieran a faltas graves, y que además se haya impuesto una inhabilitación o un impedimento de la naturaleza antes descrita y se encuentren firmes; por tanto, no serán públicas las denuncias y procedimientos de responsabilidad administrativa en contra de cualquier servidor público, si las mismas no concluyeron en una sanción de inhabilitación por falta grave y se encuentre firme.</b></p>
<p>III. Las partes o secciones clasificadas, así como las páginas que la conforman</p>	<p>La existencia o inexistencia de denuncias y procedimientos de responsabilidad administrativa iniciados en contra de ROMÁN VALDIVIA ORTEGA, FRANCISCO ORNAR RAMÍREZ ESCOBEDO, DIANA KARINA SÁNCHEZ GÓMEZ, DIEGO ISAAC LICEA PEGUEROS, GERARDO JUVENAL JIMÉNEZ ALEMÁN, LUZ ELIZABETH MONJARAZ GUERRERO, OSCAR LEONARDO HERNÁNDEZ VÁZQUEZ, KARLA MAURILIA LÓPEZ LOMELÍ y HÉCTOR ADÁN GUTIÉRREZ DELGADO, tramitados por las Autoridades Investigadoras, Sustanciadoras y Resolutoras de la Secretaría de la Honestidad y la existencia e inexistencia de denuncias recibidas por el Órgano Interno de Control de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, en el periodo comprendido del 01 de enero de 2022 al 30 de Octubre de 2024; que en su caso, no hayan concluido en una sanción firme de inhabilitación por la comisión de una falta administrativa grave.</p>
<p>IV. Tipo de clasificación</p>	<p>La información que se clasifica es <u>confidencial de manera total</u>, en razón de que si únicamente puede ser pública la información relativa a las sanciones de inhabilitación que deriven de la comisión de una falta administrativa grave y que se encuentre firme, por mayoría de razón, <b>no deben de ser públicos</b> los datos sobre la existencia o inexistencia de denuncias y procedimientos de responsabilidad administrativa iniciados en contra de ROMÁN VALDIVIA ORTEGA, FRANCISCO ORNAR RAMÍREZ ESCOBEDO, DIANA KARINA SÁNCHEZ GÓMEZ, DIEGO ISAAC LICEA PEGUEROS, GERARDO JUVENAL JIMÉNEZ ALEMÁN,</p>





**GUANAJUATO**

GOBIERNO DE LA GENTE

UNIDAD DE TRANSPARENCIA  
DEL PODER EJECUTIVO

## Comité de Transparencia del Poder Ejecutivo

	<p>LUZ ELIZABETH MONJARAZ GUERRERO, OSCAR LEONARDO HERNÁNDEZ VÁZQUEZ, KARLA MAURILIA LÓPEZ LOMELÍ y HÉCTOR ADÁN GUTIÉRREZ DELGADO, tramitados por las Autoridades Investigadoras, Sustanciadoras y Resolutoras de la Secretaría de la Honestidad y la existencia e inexistencia de denuncias recibidas por el Órgano Interno de Control de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, en el periodo comprendido del 01 de enero de 2022 al 30 de Octubre de 2024; que en su caso, no hayan concluido en una sanción firme de inhabilitación por la comisión de una falta administrativa grave.</p> <p>Lo anterior, debido a que, aún y cuando se hubiesen presentado denuncias, o iniciado procedimientos de responsabilidad administrativa en contra de las personas citadas, lo cierto es que <u>no deben ser públicos sino se actualiza el supuesto consistente en la existencia de una sanción de inhabilitación con motivo de la comisión de una falta grave y que se encuentre firme</u>, siendo este el único caso en que en términos de lo dispuesto en el artículo 27 párrafo cuarto de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, debe ser del conocimiento público.</p> <p>En consecuencia, no puede otorgarse información respecto de la existencia o inexistencia de denuncias y procedimientos de responsabilidad administrativa iniciados en contra de ROMÁN VALDIVIA ORTEGA, FRANCISCO ORNAR RAMÍREZ ESCOBEDO, DIANA KARINA SÁNCHEZ GÓMEZ, DIEGO ISAAC LICEA PEGUEROS, GERARDO JUVENAL JIMÉNEZ ALEMÁN, LUZ ELIZABETH MONJARAZ GUERRERO, OSCAR LEONARDO HERNÁNDEZ VÁZQUEZ, KARLA MAURILIA LÓPEZ LOMELÍ y HÉCTOR ADÁN GUTIÉRREZ DELGADO, tramitados por las Autoridades Investigadoras, Sustanciadoras y Resolutoras de la Secretaría de la Honestidad y la existencia e inexistencia de denuncias recibidas por el Órgano Interno de Control de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, en el periodo comprendido del 01 de enero de 2022 al 30 de Octubre de 2024; que en su caso, no hayan concluido en una sanción firme de inhabilitación por la comisión de una falta administrativa grave. Lo anterior se considera así, ya que se puede afectar la honorabilidad, fama pública, profesionalismo, buena conducta e imagen hacia la sociedad de las personas servidoras públicas, sin que exista una resolución firme que determine la imposición de la sanción de inhabilitación por la comisión de una falta calificada como grave.</p>
<p><b>V.</b> Fundamento legal, indicando el nombre del ordenamiento, el o los artículos, fracción(es), párrafo(s) con base</p>	<p>Con fundamento en los artículos 77 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, en correlación con el 3 fracción VII de la <b>Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato</b>, se clasifica por los siguientes motivos:</p>





## Comité de Transparencia del Poder Ejecutivo

en los cuales se sustente la clasificación; así como las razones o circunstancias que motivaron la misma.

conformidad con los artículos 3 fracciones II, III, IV, XX y XXII, 9 fracciones I y II, y 10 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, la actualmente denominada **Secretaría de la Honestidad y los Órganos Internos de Control de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal**, se encuentran **legalmente facultados para investigar las faltas administrativas** imputables a servidores públicos y particulares a través de las **autoridades investigadoras** que reglamentariamente tengan conferida dicha atribución, así como **substanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa por faltas no graves**, e inclusive **substanciar y remitir para su resolución al Tribunal de Justicia Administrativa** los procedimientos de responsabilidad administrativa por **faltas graves**, por medio de la **autoridad substanciadora / resolutora** que reglamentariamente tiene conferida la respectiva atribución.

Así también, es importante mencionar que los **Órganos Internos de Control de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal**, en el caso en particular, el **Órgano Interno de Control de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas**, dependen jerárquica y funcionalmente de la Secretaría del Poder Ejecutivo con atribuciones de Control Interno, facultad a cargo de esta Secretaría de la Honestidad, conforme a lo dispuesto en el artículo 32 fracción I inciso g) de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato. Por ello, para efectos de la atención del folio en cita, esta **Secretaría de la Honestidad** clasificará la información de la existencia o inexistencia de denuncias y procedimientos de responsabilidad administrativa tramitados por sus **Autoridades Investigadoras, Substanciadoras y Resolutoras**, así como lo correspondiente a la existencia o inexistencia de denuncias recibidas por el **Órgano Interno de Control de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas**.

Es de resaltarse, en materia de responsabilidades administrativas, el artículo 27 párrafo cuarto de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, dispone que únicamente se harán públicas las constancias de sanciones o de inhabilitación que se encuentren firmes en contra de servidores públicos o particulares que hayan sido sancionados por actos vinculados por faltas graves.

### «Artículo 27. ...

En el sistema de Servidores Públicos y particulares sancionados de la Plataforma digital estatal se inscribirán y se harán públicas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción y las disposiciones legales en materia de transparencia, las constancias de sanciones o de inhabilitación que se encuentren firmes en contra de los Servidores Públicos o particulares que hayan sido sancionados por actos vinculados con faltas graves en términos de esta



## Comité de Transparencia del Poder Ejecutivo

Ley, así como la anotación de aquellas abstenciones que hayan realizado las autoridades investigadoras o el Tribunal, en términos de los artículos 77 y 80 de esta Ley.

...»

Por tanto, si las sanciones impuestas, diversas a la inhabilitación por faltas graves no serán públicas, por mayoría de razón, **no deben de ser públicos** los datos en el sentido de si una persona cuenta con denuncias presentadas en su contra o procedimientos de responsabilidad administrativa iniciados, si éstos no culminaron en una sanción firme de inhabilitación por la comisión de una falta administrativa grave. Y si la Ley de Responsabilidades Administrativas de nuestro Estado dispone que únicamente serán públicas las sanciones de inhabilitación firmes por la comisión de faltas administrativas graves, a contrario sensu, se entiende que toda aquella información que no consista en una sanción de inhabilitación por falta grave, debe de ser considerada información confidencial, y por ende, también se considera confidencial todas las denuncias y procedimientos de responsabilidad administrativos de todas aquellas que no derivan en dicha sanción.

En consecuencia, al no actualizarse el supuesto descrito en el párrafo que antecede, no puede otorgarse información respecto de Secretaría de la Honestidad clasificará la información de la existencia o inexistencia de denuncias y procedimientos de responsabilidad administrativa tramitados por sus Autoridades Investigadoras, Substanciadoras y Resolutoras, así como lo correspondiente a la existencia de denuncias recibidas por el Órgano Interno de Control de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas.

Refuerza lo anterior lo establecido en el artículo 58 de la Ley Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, el cual estipula que **las sanciones impuestas por faltas administrativas graves serán del conocimiento público** cuando contengan impedimentos o inhabilitaciones para ser contratados como servidores públicos o como prestadores de servicios o contratistas del sector público; así también, **las sanciones relativas a responsabilidades administrativas no graves**, el segundo párrafo de dicho numeral dispone que **quedarán registradas** para efectos de eventual reincidencia, pero **no serán públicas**

En este orden de ideas, resulta de trascendental relevancia hacer notar que:

1.- El artículo 7 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados refiere que: «...**Las Autoridades garantizarán la privacidad de los individuos y deberán velar porque terceras personas no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente** ...».



## Comité de Transparencia del Poder Ejecutivo

Como se observa, las citadas piezas articulares contienen disposiciones específicas relativas a la obligación de los sujetos obligados a garantizar la privacidad de los individuos, así como **la publicidad de las sanciones impuestas por las faltas administrativas**, y en cuánto a esto último, se hace énfasis en que:

- Solamente serán del conocimiento público las que se refieran a faltas graves, y que además se haya impuesto una inhabilitación o un impedimento de la naturaleza antes descrita.
- No serán del conocimiento público las sanciones que se refieran a faltas no graves.

De acuerdo con lo expuesto, es claro que la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, cuyo objeto consiste en establecer las bases de coordinación para que las autoridades competentes prevengan, identifiquen, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción, define expresamente cuáles sanciones han de ser del conocimiento público, a la vez que preceptúa cuáles no deben serlo.

En observancia de dicha disposición, como ya se señaló líneas arriba, el cuarto párrafo del artículo 27 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato estipula lo siguiente:

«En el sistema de Servidores Públicos y particulares sancionados de la Plataforma digital estatal se inscribirán y **se harán públicas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción** y las disposiciones legales en materia de transparencia, **las constancias de sanciones o de inhabilitación que se encuentren firmes** en contra de los Servidores Públicos o particulares que hayan sido **sancionados por actos vinculados con faltas graves** en términos de esta Ley...».

Bajo esa tesitura, es evidente que si la ley de la materia solamente permite hacer públicas las sanciones que cumplen con los elementos antes reseñados, el Poder Ejecutivo como sujeto obligado, puede analizar y concluir la clasificación de información diversa a la obligada a publicar por Ley, en mérito de lo cual se desprende que es **procedente preservar la confidencialidad sobre la existencia o inexistencia de denuncias y procedimientos de responsabilidad administrativa iniciados en contra de ROMÁN VALDIVIA ORTEGA, FRANCISCO ORNAR RAMÍREZ ESCOBEDO, DIANA KARINA SÁNCHEZ GÓMEZ, DIEGO ISAAC LICEA PEGUEROS, GERARDO JUVENAL JIMÉNEZ ALEMÁN, LUZ ELIZABETH MONJARAZ GUERRERO, OSCAR LEONARDO HERNÁNDEZ VÁZQUEZ, KARLA MAURILIA LÓPEZ LOMELÍ y HÉCTOR ADÁN GUTIÉRREZ DELGADO, tramitados por las Autoridades Investigadoras, Sustanciadoras y Resolutoras de la Secretaría de la Honestidad y la existencia e inexistencia de**





**GUANAJUATO**

GOBIERNO DE LA GENTE

UNIDAD DE TRANSPARENCIA  
DEL PODER EJECUTIVO

## Comité de Transparencia del Poder Ejecutivo

*denuncias recibidas por el Órgano Interno de Control de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, en el periodo comprendido del 01 de enero de 2022 al 30 de Octubre de 2024; que en su caso, no hayan concluido en una sanción firme de inhabilitación por la comisión de una falta administrativa grave, supuesto previsto en el artículo 27 párrafo cuarto de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, en relación con el artículo 58 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Guanajuato, aunado al hecho de que existe la obligación de proteger a **cualquier servidor público**, para que no sea objeto de discriminación que atente contra su dignidad humana, que menoscabe su honor, intimidad, imagen, derechos y libertades, ello conforme a lo dispuesto en los artículos 1º párrafos segundo, tercero y quinto; 6º inciso A) fracción II y 16 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en relación con el numeral 11 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos; y el artículo 17 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Lo anterior a efecto de dar cumplimiento a la obligación que como sujeto obligado en términos de lo señalado en el artículo 7 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, debe otorgar para garantizar la privacidad de los individuos.*

*Así pues, se justifica la clasificación como confidencial la información respecto de **la existencia o inexistencia de denuncias y procedimientos de responsabilidad administrativa iniciados en contra de ROMÁN VALDIVIA ORTEGA, FRANCISCO ORNAR RAMÍREZ ESCOBEDO, DIANA KARINA SÁNCHEZ GÓMEZ, DIEGO ISAAC LICEA PEGUEROS, GERARDO JUVENAL JIMÉNEZ ALEMÁN, LUZ ELIZABETH MONJARAZ GUERRERO, OSCAR LEONARDO HERNÁNDEZ VÁZQUEZ, KARLA MAURILIA LÓPEZ LOMELÍ y HÉCTOR ADÁN GUTIÉRREZ DELGADO**, tramitados por las Autoridades Investigadoras, Sustanciadoras y Resolutoras de la Secretaría de la Honestidad y la existencia e inexistencia de denuncias recibidas por el Órgano Interno de Control de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, en el periodo comprendido del 01 de enero de 2022 al 30 de Octubre de 2024; que en su caso, no hayan concluido en una sanción firme de inhabilitación por la comisión de una falta administrativa grave, toda vez que el proporcionar los datos solicitados, **generaría un riesgo de perjuicio patente e irrefutable** por la afectación que ocasionaría a las personas involucradas de manera personal y directa, al vulnerarse el principio de presunción de inocencia contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de influir negativamente respecto a su fama pública, profesionalismo, honorabilidad, buena conducta, imagen hacia la sociedad, repercutiendo así directa e inmediatamente en la actividad que desempeñan, representando un riesgo real e inminente al ocasionar un daño irreparable a la persona, que provocaría en el imaginario social público el cuestionamiento o duda respecto de la honorabilidad de la persona*

RCT\_3436\_2024 Página 9 de 17





## Comité de Transparencia del Poder Ejecutivo

	servidora pública vinculada a una denuncia o un procedimiento de responsabilidad administrativa que no derivó en una sanción de inhabilitación.
<b>VI. Tipo de clasificación</b>	<p>La información que se clasifica es completa y corresponde a la existencia o inexistencia de denuncias y procedimientos de responsabilidad administrativa iniciados en contra de ROMÁN VALDIVIA ORTEGA, FRANCISCO ORNAR RAMÍREZ ESCOBEDO, DIANA KARINA SÁNCHEZ GÓMEZ, DIEGO ISAAC LICEA PEGUEROS, GERARDO JUVENAL JIMÉNEZ ALEMÁN, LUZ ELIZABETH MONJARAZ GUERRERO, OSCAR LEONARDO HERNÁNDEZ VÁZQUEZ, KARLA MAURILIA LÓPEZ LOMELÍ y HÉCTOR ADÁN GUTIÉRREZ DELGADO, tramitados por las Autoridades Investigadoras, Sustanciadoras y Resolutoras de la Secretaría de la Honestidad y la existencia e inexistencia de denuncias recibidas por el Órgano Interno de Control de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, en el periodo comprendido del 01 de enero de 2022 al 30 de Octubre de 2024; que en su caso, no hayan concluido en una sanción firme de inhabilitación por la comisión de una falta administrativa grave, pues la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato considera que en la materia de responsabilidades administrativas, únicamente puede ser pública la información relativa a las sanciones de inhabilitación que deriven de la comisión de una falta administrativa grave y que se encuentre firme.</p> <p>Se justifica la clasificación como confidencial la información respecto de la existencia o inexistencia de denuncias y procedimientos de responsabilidad administrativa iniciados en contra de ROMÁN VALDIVIA ORTEGA, FRANCISCO ORNAR RAMÍREZ ESCOBEDO, DIANA KARINA SÁNCHEZ GÓMEZ, DIEGO ISAAC LICEA PEGUEROS, GERARDO JUVENAL JIMÉNEZ ALEMÁN, LUZ ELIZABETH MONJARAZ GUERRERO, OSCAR LEONARDO HERNÁNDEZ VÁZQUEZ, KARLA MAURILIA LÓPEZ LOMELÍ y HÉCTOR ADÁN GUTIÉRREZ DELGADO, tramitados por las Autoridades Investigadoras, Sustanciadoras y Resolutoras de la Secretaría de la Honestidad y la existencia e inexistencia de denuncias recibidas por el Órgano Interno de Control de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, en el periodo comprendido del 01 de enero de 2022 al 30 de Octubre de 2024; que en su caso, no hayan concluido en una sanción firme de inhabilitación por la comisión de una falta administrativa grave, toda vez que el proporcionar los datos solicitados, <b>generaría un riesgo de perjuicio patente e irrefutable</b> por la afectación que ocasionaría a las personas involucradas de manera personal y directa, al vulnerarse el principio de presunción de inocencia contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de influir negativamente respecto a su fama pública, profesionalismo, honorabilidad, buena conducta, imagen hacia la sociedad, repercutiendo así directa e inmediatamente en la actividad que desempeñan,</p>



representando un riesgo real e inminente al ocasionar un daño irreparable a la persona, que provocaría en el imaginario social público el cuestionamiento o duda respecto de la honorabilidad de la persona servidora pública vinculada a una queja o denuncia que no derivó en una sanción de inhabilitación.

Lo anterior, debido a que es motivo de clasificación, al existir disposiciones específicas relativas a la obligación de los sujetos obligados a garantizar la privacidad de los individuos, así como la **publicidad de las sanciones impuestas por las faltas administrativas**, y en cuanto a esto último, hace énfasis en que se deben considerar los siguientes supuestos:

- Solamente serán del conocimiento público las que se refieran a faltas graves, y que además se haya impuesto una inhabilitación o un impedimento de la naturaleza antes descrita.
- No serán del conocimiento público las sanciones que se refieran a faltas no graves.

Bajo esa tesitura, es evidente que si la ley de la materia solamente permite hacer públicas las sanciones que cumplen con los elementos antes reseñados, el Poder Ejecutivo como sujeto obligado, puede analizar y concluir la clasificación de información diversa a la obligada a publicar por Ley, en mérito de lo cual se desprende que es **procedente preservar la confidencialidad sobre la existencia o inexistencia de denuncias y procedimientos de responsabilidad administrativa iniciados en contra de ROMÁN VALDIVIA ORTEGA, FRANCISCO ORNAR RAMÍREZ ESCOBEDO, DIANA KARINA SÁNCHEZ GÓMEZ, DIEGO ISAAC LICEA PEGUEROS, GERARDO JUVENAL JIMÉNEZ ALEMÁN, LUZ ELIZABETH MONJARAZ GUERRERO, OSCAR LEONARDO HERNÁNDEZ VÁZQUEZ, KARLA MAURILIA LÓPEZ LOMELÍ y HÉCTOR ADÁN GUTIÉRREZ DELGADO, tramitados por las Autoridades Investigadoras, Sustanciadoras y Resolutoras de la Secretaría de la Honestidad y la existencia e inexistencia de denuncias recibidas por el Órgano Interno de Control de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, en el periodo comprendido del 01 de enero de 2022 al 30 de Octubre de 2024; que en su caso, no hayan concluido en una sanción firme de inhabilitación por la comisión de una falta administrativa grave, supuesto previsto en el artículo 27 párrafo cuarto de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, en relación con el artículo 58 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Guanajuato, aunado al hecho de que existe la obligación de proteger a **cualquier servidor público**, para que no sea objeto de discriminación que atente contra su dignidad humana, que menoscabe su honor, intimidad, imagen, derechos y libertades, ello conforme a lo dispuesto en los artículos 1º párrafos segundo, tercero y quinto; 6º inciso A) fracción II y 16 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en relación con el numeral 11 de la**



	<p>Convención Americana sobre los Derechos Humanos; y el artículo 17 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Lo anterior a efecto de dar cumplimiento a la obligación que como sujeto obligado en términos de lo señalado en el artículo 7 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, debe otorgar para garantizar la privacidad de los individuos.</p> <p>En razón de ello, se justifica la <b>clasificación como confidencial de la información correspondiente a la existencia o inexistencia de denuncias y procedimientos de responsabilidad administrativa iniciados en contra de ROMÁN VALDIVIA ORTEGA, FRANCISCO ORNAR RAMÍREZ ESCOBEDO, DIANA KARINA SÁNCHEZ GÓMEZ, DIEGO ISAAC LICEA PEGUEROS, GERARDO JUVENAL JIMÉNEZ ALEMÁN, LUZ ELIZABETH MONJARAZ GUERRERO, OSCAR LEONARDO HERNÁNDEZ VÁZQUEZ, KARLA MAURILIA LÓPEZ LOMELÍ y HÉCTOR ADÁN GUTIÉRREZ DELGADO, tramitados por las Autoridades Investigadoras, Sustanciadoras y Resolutoras de la Secretaría de la Honestidad y la existencia e inexistencia de denuncias recibidas por el Órgano Interno de Control de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, en el periodo comprendido del 01 de enero de 2022 al 30 de Octubre de 2024; que en su caso, no hayan concluido en una sanción firme de inhabilitación por la comisión de una falta administrativa grave; acciones diversas a la sanción de inhabilitación derivada de una falta administrativa grave y que ésta se encuentre firme.</b></p>
(...)	(...)
(...)	(...)
(...)	(...)

Sin más por el momento, agradezco sus atenciones, y quedo en espera de su respuesta.  
(...)»

**TERCERO. ANÁLISIS DE LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN.** A efecto de determinar si procede o no la solicitud de clasificación como información confidencial relativa a la «**existencia o inexistencia de denuncias y procedimientos de responsabilidad administrativa iniciados en contra de ROMÁN VALDIVIA ORTEGA, FRANCISCO ORNAR RAMÍREZ ESCOBEDO, DIANA KARINA SÁNCHEZ GÓMEZ, DIEGO ISAAC LICEA PEGUEROS, GERARDO JUVENAL JIMÉNEZ ALEMÁN, LUZ ELIZABETH MONJARAZ GUERRERO, OSCAR LEONARDO HERNÁNDEZ VÁZQUEZ, KARLA MAURILIA LÓPEZ LOMELÍ y HÉCTOR ADÁN GUTIÉRREZ DELGADO, tramitados por las Autoridades Investigadoras, Sustanciadoras y Resolutoras de la Secretaría de la Honestidad y la existencia e inexistencia de denuncias recibidas por el Órgano Interno de Control de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, en el periodo comprendido del 01 de enero de 2022 al 30 de Octubre de 2024; que en su caso, no hayan concluido en una sanción firme de inhabilitación por la comisión de una falta administrativa grave**» es menester precisar que, si bien, el artículo 6o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Apartado A, fracción I, establece que toda la información en posesión de cualquier autoridad –el Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, para el caso que nos ocupa– es



pública, también su fracción II, refiere que esta puede ser de acceso restringido tratándose de la vida privada y los datos personales.

Para robustecer lo anterior, sirve de sustento lo señalado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis [A] publicada en el Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Abril de 2000, página 74, con registro digital 191967<sup>1</sup>, misma que a la letra refiere [lo resaltado y subrayado no es de origen]:

**«DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS. El derecho a la información consagrado en la última parte del artículo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como "reserva de información" o "secreto burocrático". En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la moral públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados.»**

Asimismo, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su tercer párrafo que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

De igual manera, la fracción II del Apartado A del artículo 6o. de la multicitada Constitución, refiere que, la información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. Además, es importante mencionar que el **derecho a la vida privada (o intimidad)** que abarca la protección de datos personales, está reconocido y protegido en declaraciones y tratados de derechos humanos que forman parte del orden jurídico mexicano, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 12), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 17), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 11).

Por tal motivo, el solo pronunciamiento sobre la **«existencia o inexistencia de denuncias y procedimientos de responsabilidad administrativa iniciados en contra de ROMÁN VALDIVIA ORTEGA, FRANCISCO ORNAR RAMÍREZ ESCOBEDO, DIANA KARINA SÁNCHEZ GÓMEZ,**

<sup>1</sup> Disponible para su consulta en: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/191967>



## Comité de Transparencia del Poder Ejecutivo

**DIEGO ISAAC LICEA PEGUEROS, GERARDO JUVENAL JIMÉNEZ ALEMÁN, LUZ ELIZABETH MONJARAZ GUERRERO, OSCAR LEONARDO HERNÁNDEZ VÁZQUEZ, KARLA MAURILIA LÓPEZ LOMELÍ y HÉCTOR ADÁN GUTIÉRREZ DELGADO, tramitados por las Autoridades Investigadoras, Sustanciadoras y Resolutoras de la Secretaría de la Honestidad y la existencia e inexistencia de denuncias recibidas por el Órgano Interno de Control de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, en el periodo comprendido del 01 de enero de 2022 al 30 de Octubre de 2024; que en su caso, no hayan concluido en una sanción firme de inhabilitación por la comisión de una falta administrativa grave»,** constituye información confidencial al estar relacionada con la situación jurídica de personas físicas identificadas o identificables, pues de proporcionarse aparejaría una afectación a la vida privada en todos los aspectos de las personas, inclusive un daño moral y perjuicio a su prestigio profesional.

Ello, con fundamento en el numeral Trigésimo octavo, fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, el cual, establece algunas categorías de datos personales entre otras los datos sobre situación jurídica o legal (información relativa a una persona que se encuentre o haya sido sujeta a un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio o jurisdiccional en materia laboral, civil, penal, fiscal, administrativa o de cualquier otra rama del Derecho, y análogos).

Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis [A]: 1a. LXII/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVII, Tomo I, página 798, febrero de 2013, con registro digital: 2002742, misma que refiere [se añade énfasis]:

**«DERECHO AL HONOR Y PRESTIGIO PROFESIONAL.** Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. XX/2011 (10a.), de rubro "DERECHO FUNDAMENTAL AL HONOR. SU DIMENSIÓN SUBJETIVA Y OBJETIVA.", sostuvo que el derecho al honor tiene una dimensión objetiva o externa, conforme a la cual éste puede definirse como el derecho a que otros no condicionen negativamente la opinión que los demás hayan de formarse de nosotros. **En esta dimensión, el derecho al honor ampara la buena reputación de una persona en sus cualidades morales y profesionales, protegiéndola frente a expresiones o mensajes que la hagan desmerecer en la consideración ajena, al ir en su descrédito o menosprecio.** Por lo mismo, esta Primera Sala estima que en ciertos casos y bajo determinadas circunstancias, el juicio crítico o **la información divulgada acerca de la conducta profesional o laboral de una persona puede constituir un auténtico ataque a su honor.** En esos supuestos, los mensajes absolutamente vejatorios de una persona, se dirigen contra su comportamiento en el ámbito en el que desempeña su labor u ocupación, pudiendo hacerle desmerecer ante la opinión ajena con igual intensidad y daño que si la descalificación estuviese dirigida directamente a su persona o sus cualidades morales. Esto es así porque la actividad profesional suele ser una de las formas más destacadas de manifestación externa de la personalidad y de la relación del individuo con el resto de la colectividad, de forma que la descalificación injuriosa o innecesaria de ese comportamiento tiene un especial e intenso efecto sobre dicha relación y sobre lo que los demás llegasen a pensar de una persona, pudiendo repercutir tanto en los resultados patrimoniales de su actividad como en la imagen personal que de ella se tenga. No obstante, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que la simple crítica a la pericia profesional en el desempeño de una actividad no debe confundirse sin más con un atentado contra el honor, ya que el





**GUANAJUATO**

GOBIERNO DE LA GENTE

UNIDAD DE TRANSPARENCIA  
DEL PODER EJECUTIVO

## Comité de Transparencia del Poder Ejecutivo

*no ser en la consideración de un tercero un buen profesional o el idóneo para realizar determinada actividad no constituye per se un ataque contra su honor. Las críticas a la aptitud profesional de otra persona serán lesivas del derecho al honor cuando, sin ser una expresión protegida por la libertad de expresión o el derecho a la información, constituyan: (i) una descalificación de la probidad profesional de una persona que pueda dañar grave e injustificada o infundadamente su imagen pública, o (ii) críticas que, pese a estar formalmente dirigidas a la actividad profesional de un individuo, en el fondo impliquen una descalificación personal, al repercutir directamente en su consideración y dignidad individuales.»*

Se refuerza el planteamiento señalado a supralíneas con el siguiente criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis [A]: 1a. XXXIV/2019 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 65, Tomo I, página 787, abril de 2019, con registro digital: 2019714, misma que refiere:

**«DAÑO MORAL. SU EXISTENCIA POR LA AFECTACIÓN DEL DERECHO AL HONOR EN SU VERTIENTE DE BUENA REPUTACIÓN, NO GOZA DE PRESUNCIÓN, SINO QUE DEBE ACREDITARSE.** El derecho humano al honor, como parte del bloque de los denominados derechos de la personalidad, **comprende en su dimensión objetiva, externa o social, a la buena reputación, y ésta tiene como componentes, por una parte, las buenas cualidades morales o profesionales de la persona, que pueden considerarse valores respecto de ella y, por otra, la buena opinión, consideración o estima, que los demás tengan de ella o para con ella por esos valores, y que constituye un bien jurídico de su personalidad, del cual goza como resultado de su comportamiento moral y/o profesional; por ende, la buena reputación sí entraña un derecho que asiste a todas las personas por igual, y se traduce en la facultad que cada individuo tiene de exigir que otro no condicione negativamente la opinión, consideración o estima que los demás se han de formar sobre él.** En ese sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que tanto las personas físicas como las morales cuentan dentro de los derechos de su personalidad, con el derecho al honor y a su buena reputación, por lo que tienen legitimación para emprender acciones de daño moral cuando esos bienes jurídicos son lesionados. Así, cuando se juzguen actos ilícitos concretos que potencialmente puedan lesionar el derecho al honor en su vertiente de buena reputación, no es acorde con el contenido y alcance de ese derecho sostener que pueda exigirse al accionante que demuestre la existencia y magnitud de una previa buena reputación, pues ello implicaría negar a ésta la naturaleza de derecho fundamental, además, porque es inherente a ese derecho presumirla por igual en todas las personas y en todos los casos, y partir de la base de su existencia para determinar si los hechos o actos ilícitos materia del litigio afectaron esa buena reputación. Ahora bien, la existencia del daño moral derivado de la afectación a ese derecho es una cuestión distinta, respecto de la cual no es posible sentar su presunción, como una premisa inherente a su definición, contenido y alcance, sino que debe acreditarse, porque la presunción de daño en que se sustenta la denominada teoría de la prueba objetiva, se justifica en dos razones esenciales: 1) la imposibilidad o notoria dificultad de acreditar mediante prueba directa la afectación, derivado de la naturaleza intangible e inmaterial de ésta; y, 2) la posibilidad de establecer la certeza de la afectación como consecuencia necesaria, lógica y natural u ordinaria, del acto o hecho ilícito; condiciones que no necesariamente se actualizan cuando se aduce afectación a la buena reputación, ya que ésta implica la existencia de factores o elementos externos y la intervención de otras personas, según el tipo de interacción o relación existente entre éstas y el afectado, que son susceptibles de expresión material y, por tanto, objeto de prueba directa que la acredite.»





Ahora bien, cabe mencionar que la publicidad de las sanciones que se imponen en procedimientos de responsabilidad administrativa, se tiene en cuenta que solo deben publicarse aquellas que consistan en inhabilitación y deriven de faltas administrativas graves cuando éstas contengan impedimentos o inhabilitaciones para ser contratados como servidores públicos o como prestadores de servicios o contratistas del sector público, en términos de la Ley de Responsabilidades aplicable, ello de conformidad con el artículo 58 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato; asimismo, dicho precepto señala que los registros de las sanciones relativas a responsabilidades administrativas no graves, quedarán registradas para efectos de eventual reincidencia, **pero no serán públicas.**

Aunado a lo anterior, y a efecto de robustecer el análisis que se plantea, es importante mencionar que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, refiere en su criterio de interpretación con clave de control **SO/005/2024**, lo siguiente:

**«Información confidencial. La constituye el pronunciamiento de existencia o inexistencia de información relacionada con denuncias o procedimientos en trámite o sin sanción, seguidos en contra de personas servidoras públicas. Cualquier pronunciamiento relativo a la existencia o inexistencia de información relacionada con denuncias o quejas interpuestas en contra de personas servidoras públicas identificadas que se encuentren en trámite, que no se encuentren firmes o que hayan culminado sin sanción, deberá clasificarse como confidencial por estar relacionada directamente con la situación jurídica de una persona física identificada, cuya divulgación generaría una afectación al derecho a su privacidad, intimidad, honor, reputación y presunción de inocencia.»**

En consecuencia, se concluye que la información relativa a la **«existencia o inexistencia de denuncias y procedimientos de responsabilidad administrativa iniciados en contra de ROMÁN VALDIVIA ORTEGA, FRANCISCO ORNAR RAMÍREZ ESCOBEDO, DIANA KARINA SÁNCHEZ GÓMEZ, DIEGO ISAAC LICEA PEGUEROS, GERARDO JUVENAL JIMÉNEZ ALEMÁN, LUZ ELIZABETH MONJARAZ GUERRERO, OSCAR LEONARDO HERNÁNDEZ VÁZQUEZ, KARLA MAURILIA LÓPEZ LOMELÍ y HÉCTOR ADÁN GUTIÉRREZ DELGADO, tramitados por las Autoridades Investigadoras, Sustanciadoras y Resolutoras de la Secretaría de la Honestidad y la existencia e inexistencia de denuncias recibidas por el Órgano Interno de Control de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, en el periodo comprendido del 01 de enero de 2022 al 30 de Octubre de 2024; que en su caso, no hayan concluido en una sanción firme de inhabilitación por la comisión de una falta administrativa grave»**, tiene el carácter de **confidencial**, salvo aquellos casos en los que no correspondan a sanciones firmes de inhabilitación por la comisión de una falta administrativa grave.

Por lo expuesto y fundado; se

**RESUELVE:**





**GUANAJUATO**

GOBIERNO DE LA GENTE

UNIDAD DE TRANSPARENCIA  
DEL PODER EJECUTIVO

## Comité de Transparencia del Poder Ejecutivo

**PRIMERO.** Se **confirma la confidencialidad** de la información solicitada, en los términos de los considerandos SEGUNDO y TERCERO. Lo anterior, con motivo de la solicitud tramitada bajo el interno **61449**, correspondiente al folio PNT **111100500407424**.

**SEGUNDO.** Notifíquese la presente resolución a la Unidad de Enlace y a la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo y, en su oportunidad, archívese como asunto concluido.

Así lo resolvió el Comité de Transparencia del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, por unanimidad de votos de sus integrantes, quienes firman al margen y al calce del presente resolutivo.

**Aura Fabiola Romero Fonseca**  
Presidenta del Comité de Transparencia del  
Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato

**Rocío Sandoval Galván**  
Vocal del Comité de Transparencia del Poder  
Ejecutivo del Estado de Guanajuato

**Jorge Antonio García Rocha**  
Vocal del Comité de Transparencia del Poder  
Ejecutivo del Estado de Guanajuato

